



AMCHAM
GUATEMALA

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

AmCham In Action

AmCham participa activamente para ser una fuente de opinión con soluciones proactivas a los problemas que afectan el desarrollo social y económico del país, basado en la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Guatemala.

ÍNDICE

I. ESTADO DE DERECHO

- a. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTADO DE DERECHO
- b. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
 - Fortalecimiento institucional
 - Profesionalización
 - Presupuesto público y planificación
 - Sistema anticorrupción y *Accountability*
 - Resolución de conflictos
 - Concentración de regulación
 - Excepciones mínimas
 - Regulación específica para la contratación de obras, bienes y servicios
 - Sistema de contratación y accesibilidad de la información
- c. CONSULTA DE BUENA FE A PUEBLOS INDÍGENAS - CONVENIO 169 DE LA Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- d. REGLAMENTO DEL CONVENIO 175 DE LA Organización Internacional del Trabajo (OIT)

II. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

- a. LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL
- b. FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN GUATEMALA

III. FACILITACIÓN DEL COMERCIO

- a. LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
- b. REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS
- c. LEY DE COMPETENCIA

IV. REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- a. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
- b. LEY DE INSOLVENCIAS

V. ASUNTOS MIGRATORIOS

- a. ACUERDO ENTRE GUATEMALA Y LOS EE. UU. SOBRE UN PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES -ACUERDO PTAT-

REF. CONTENIDO PARA AMCHAM IN ACTION

VI. ESTADO DE DERECHO

a. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTADO DE DERECHO

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana -AmCham- cree firmemente que es esencial defender y respetar el Estado de Derecho del país, a través de la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Es importante fortalecer continuamente las instituciones, la democracia y la independencia de los órganos jurisdiccionales que juegan un papel importante en la transformación del país. Los fallos discrecionales de los tribunales, así como la debilidad de las Instituciones judiciales nacionales, han creado un ambiente de incertidumbre que está dando lugar a la desconfianza del sector privado y productivo. De igual manera, la debilidad del Estado de Derecho se materializa a través de situaciones concretas que afectan a empresas. Algunos ejemplos de esto, es la falta de respeto al principio de presunción de inocencia, instituciones judiciales que no cumplan con los términos de la ley, así como interpretaciones arbitrarias de la ley. De igual manera, la falta de respuesta de las instituciones a las preguntas y requisitos que las empresas hacen en el marco de procesos administrativos o judiciales.

Es importante para la sociedad guatemalteca vivir en un clima de armonía y estabilidad política y social, respetando la propiedad privada y contribuyendo al crecimiento económico de Guatemala, priorizando la seguridad jurídica, la transparencia y el bien común. Todos estos son principios esenciales para asegurar el desarrollo económico y el crecimiento para promover nuevas inversiones y la creación de empleos, evitando así el desplazamiento interno y externo de la población y mejorando la calidad de vida de todos los guatemaltecos.

AmCham cree que el enfoque principal para los sectores público y privado de Guatemala y la sociedad civil debería ser la construcción institucional dirigida a mantener la estabilidad y la armonía del país.

b. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En aras de la competitividad del país y atracción de inversión extranjera directa, es necesario contar con un sistema de contratación pública eficiente y transparente. Actualmente, las contrataciones del sector público se rigen bajo la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 52-87 y su reglamento. No obstante, a ello, dicha normativa ha sido modificada en varias ocasiones, ocasionando contradicciones e incoherencias dentro del mismo texto. Lo cual no responde a las necesidades actuales.

Para ello, es necesario desarrollar un nuevo marco regulatorio que garantice un equilibrio adecuado entre los controles y contrapesos y la libertad necesaria para contratar de manera eficiente y competitiva, sin descuidar la necesidad de fortalecer la transparencia.

Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones del Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, se considera necesario que cualquier marco regulatorio propuesto sobre este tema, debe incluir los siguientes pilares:

- **Fortalecimiento Institucional**

El Sistema de Contratación Público debe estar dotado de una infraestructura institucional sólida, que promueva la eficiencia y mitigue la toma de decisiones arbitrarias. Por lo tanto, se hace necesario que cualquier nueva regulación fortalezca el Ministerio de Finanzas, como ente coordinador del sistema de contrataciones y adquisiciones de gobierno central y sus entidades descentralizadas y autónomas, en la cual se cuente con los recursos necesarios y cobertura institucional claramente establecida para la correcta administración. Asimismo, se cuente con las directrices y lineamientos para todas las entidades a cargo de la contratación deben cumplir para evitar la

proliferación de regulaciones dispersas sujetas a los diferentes criterios de cada entidad gubernamental.

- **Profesionalización**

La eficiencia del Sistema va de la mano con la profesionalización de los funcionarios públicos. De esta manera, las herramientas deben diseñarse de manera que todos los funcionarios a cargo de la contratación pública tengan un alto nivel de integridad y capacitación técnica. Para el

- **Presupuesto Público y Planificación**

Para que los procesos de contratación sean más eficientes y para optimizar el gasto público, la contratación pública debe integrarse en la gestión de las finanzas públicas, de esta manera, en la regulación se debe reflejar coordinación entre las adquisiciones y la gestión del presupuesto, estableciendo las obligaciones y el procedimiento para elaboración del presupuesto y financiamiento multianual para optimizar el diseño y la planificación del ciclo de adquisiciones.

- **Sistema Anticorrupción y Rendición de Cuentas**

El Sistema de Contratación Público debe tener controles internos, medidas para garantizar el cumplimiento de los contratos y programas anticorrupción, dirigidos a las entidades contratantes y a los proveedores. Para ello es necesario, que los contratos públicos incluyan garantías de exención de corrupción y adopten medidas para verificar la veracidad de las declaraciones y garantías de exención de corrupción.

- **Resolución de Conflictos**

La eficiencia del Sistema de contratación también dependerá del funcionamiento de los mecanismos de resolución de conflictos

establecidos por la Ley. La ley debe contemplar mecanismos eficientes de resolución de conflictos en la parte administrativa.

- **Concentración de Regulación**

El Sistema de Contratación Pública debe estar dotado de un amplio margen de certeza para fomentar la confianza de los solicitantes y evitar la arbitrariedad de las entidades encargadas de la contratación. Por lo tanto, la ley debe contener disposiciones razonables y sólidas para que los términos de licitación y contratación sean lo más claros y simples posibles, evitando la introducción de condiciones que reduzcan o contradigan las de otras leyes o regulaciones.

La publicación y regulaciones y acuerdos de la Juntas de licitación debe regularse de tal manera que toda la información relevante para la aplicación de la ley se encuentre y se derive de un único organismo regulador. Esto se vuelve más fácil de inspeccionar a cada entidad gubernamental porque no hay necesidad de adaptarse a las regulaciones de cada entidad independiente.

- **Excepciones mínimas**

El abuso de excepciones ha resultado en un sistema impredecible, ingobernable, difícil de controlar e ineficiente, con riesgos altos de corrupción. Por lo tanto, las excepciones deben ser limitadas, así como la contratación con un solo proveedor. De igual manera, se debe regular el proceso de contratación en casos de emergencia y calamidad pública.

Las excepciones deben ser mínimas, además, el proceso debe establecerse de modo que siempre existan requisitos para cumplir con un mecanismo eficiente y transparente.

- **Regulación específica para la contratación de obras, bienes y servicios**

Se debe crear una contemplan regulación específica para la contratación de obras, bienes y servicios, de acuerdo con sus características y particularidades específicas.

- **Sistema de Contratación y Accesibilidad de la Información**

Es esencial que el marco regulatorio fomente la participación transparente y efectiva de todas las partes interesadas, buscando aumentar la eficiencia durante todo el ciclo de contratación pública. La implementación de tecnologías de información y comunicación es un aspecto importante para lograr este objetivo, porque representa un medio para garantizar la transparencia y el acceso a las licitaciones públicas, promover la competitividad, simplificar los procedimientos de adjudicaciones de los contratos y la gestión de estos.

c. CONSULTA DE BUENA FE A PUEBLOS INDÍGENAS - CONVENIO 169 DE LA OIT

El Gobierno de Guatemala ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en junio de 1996, mediante el cual se asumió la responsabilidad de implementar procesos de consulta no vinculantes antes de autorizar medidas administrativas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, con respecto a su cultura, formas de vida, instituciones, tradiciones, derechos colectivos y el derecho a participar efectivamente en las decisiones que impactan sus formas de desarrollo.

Por el momento no existe un documento que proporcione al Poder Ejecutivo un procedimiento apropiado para llevar a cabo procesos de consulta previa e informada realizada de buena fe. El sistema judicial ha ordenado consultas para proyectos de transmisión minera, hidroeléctrica y eléctrica en diferentes etapas: preparación, construcción y operación. En

la mayoría de las sentencias, el Tribunal Constitucional ha dado instrucciones al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la implementación de procesos de consulta basados en el Convenio 169. Sin embargo, el MEM desarrolló una metodología para implementar estos procedimientos y cumplir así con las instrucciones del Tribunal, sumando experiencias de países como Perú, Colombia y Chile. Esta metodología fue compartida con los representantes de las comunidades en casa caso.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el encargado de manejar los asuntos de la Organización Internacional de Trabajo, por lo que fue a través de dicho Ministerio, que el Gobierno de Guatemala tomó la iniciativa de trabajar una Guía de Operaciones para la implementación de consultas con los pueblos indígenas. AmCham se sumó al apoyo de esta Guía, ya que se considera que es una importante herramienta para guiar al Ejecutivo en la implementación de procesos de consulta. Dicha Guía proporciona un proceso detallado con actividades específicas que se deben cumplir y evaluar como parte del proceso, incluye además un proceso participativo que respeta las costumbres de los pueblos indígenas y permite la construcción conjunta de un mecanismo de diálogo permanente para lograr acuerdos y monitorear lo conformado.

A través del MINTRAB se realizaron esfuerzos con representantes de diversos sectores, en particular con los líderes de los pueblos indígenas, para lograr un consenso para la aplicación práctica e inmediata, de esta Guía. Se recibió apoyo de la OIT, el PNUD, el Poder Legislativo, las Embajadas y de los mismos líderes indígenas. Sin embargo, y muy a pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado un marco institucional sólido y articulado, con presencia en las zonas rurales y la capacidad de cubrir las necesidades básicas en los territorios de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta las condiciones que deben existir para implementar los procesos necesarios para un correcto uso de la guía de operaciones. La cancelación o suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos necesita ser detenida. Ya que los mismos sabotean los

objetivos de los diferentes planes de promoción del desarrollo nacionales y regionales.

d. REGLAMENTO DEL CONVENIO 175 DE LA OIT

El Convenio 175 de la OIT fue aprobado en junio de 1994, y ratificado por Guatemala en enero de 2017. El Congreso de la República por medio del Decreto 2-2017, aprueba y ratifica el Convenio 175 de la OIT el 17 de enero de 2017. Por disposición expresa del texto del Convenio, cada parte firmante se obligó a regularizar el contenido de dicho acuerdo por medio de legislación nacional interna.

El 3 de junio de 2019 se optó por aprobar el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial -Acuerdo Gubernativo 89-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social-. El 3 de octubre del 2019 la Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional algunos artículos del reglamento, lo que lo hicieron inoperante.

El 15 de julio de 2021 la Corte de Constitucionalidad resolvió sin lugar las acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto al Reglamento del Convenio, dando finalmente lugar a la contratación a tiempo parcial, por considerar que el trabajo a tiempo parcial es un modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la necesidad de asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos del acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la seguridad social, como lo determina el referido Convenio.

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

a. LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Actualmente las normas sobre infraestructura vial están desactualizadas y se encuentran en varios instrumentos. Por la cual es positivo contar con un marco jurídico único y ordenado para mayor certeza jurídica, como el que se crearía por medio de la Ley General de Infraestructura Vial. En esa línea, es positivo que la iniciativa establezca la obligación de contar con un

Plan Nacional de Infraestructura a largo plazo, esto pues no solo permitiría realizar una más eficaz fiscalización y seguimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura a nivel nacional en lo referente a su ejecución y la detección de factores que puedan poner este factor en riesgo, sino además reduciría el margen de discrecionalidad para la toma de decisiones de naturaleza política dada la potestad vinculante de dicho plan.

La iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, al contar con su propio proceso de contratación de obra y permitir la presentación de ofertas no solicitadas, incorporaría un sistema dinámico que ha sido eficaz en otros países al ser que dinamizaría el procedimiento de desarrollo de infraestructura vial, derivando en un incremento de la cobertura, calidad y competitividad. Adicionalmente, estos aspectos fomentarían una mejor coordinación entre la Autoridad Vial y los desarrolladores, al eliminarse regulación innecesaria que solamente burocratiza el proceso de desarrollo de infraestructura.

Es positivo que la iniciativa establezca un plazo para agilizar el otorgamiento de licencias de carácter ambiental, forestal o de otra naturaleza. Si transcurre el plazo, dichas licencias se tomarán por otorgadas, razón por la cual se alinean los incentivos para que las entidades correspondientes realicen las diligencias respectivas en el término que corresponda. Sin embargo, establecer “de otra naturaleza” se puede prestar a mal interpretaciones, es importante determinar claramente a que permisos se refiere.

La diversificación de los mecanismos de remuneración en atención a las modalidades de contratación, entre las que se incluyen el pago por construcción, por mantenimiento, por disponibilidad, por aportaciones que realice la autoridad vial o terceros para el desarrollo del proyecto, pago por peaje, y cualquier otra que determine la Autoridad Vial, es positiva dado que fomenta la eficiencia en el desarrollo de los proyectos de

infraestructura. Asimismo, permite la contratación multianual, que permitirá proyectos a largo plazo.

Por último, la creación de la Superintendencia de Infraestructura es importante en cuanto a la autonomía y descentralización de funciones, sin embargo, ante esta situación habría que considerarse una modificación normativa para la disminución de las funciones que por ley corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda pues este continuaría siendo el órgano rector de la infraestructura vial.

b. FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN GUATEMALA

Actualmente, Guatemala se enfrenta con grandes retos en la infraestructura del país, lo cual ha impactado en la calidad de vida de los habitantes, así como en la productividad y competitividad del país, ello debido a las diversas limitantes del modelo tradicional en el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios, tales como: limitaciones fiscales y de inversión, falta de capacidad de planificación y ejecución de los proyectos.

Otros países han superado el problema al utilizar el esquema de contratación de alianzas público privadas (APP), en la cual existe una cooperación entre el gobierno y la empresa privada, permitiendo el desarrollo eficiente y de alta calidad de la infraestructura, logrando el desarrollo de proyectos de gran envergadura, tales como la ampliación de la red vial, puertos, aeropuertos, entre otros, de forma eficiente y de alta calidad.

Guatemala, a través de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto No. 57-92, se contempló la posibilidad de participación público-privada en sentido amplio, mediante la figura de concesión pública a particulares, que permite al Estado otorgar a particulares, para que, por su cuenta y

riesgo, construyan, mejoren y /o administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio.

Sin embargo, dicho marco jurídico necesitaba una actualización y modernización para el desarrollo de proyectos APP, es por ello, que en el año 2010, se crea un nuevo marco jurídico e institucional para la contratación mediante la modalidad APP, con la aprobación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, aprobado en el decreto 16-2010 y su reglamento aprobado mediante acuerdo gubernativo 360-2011, el cual permite el desarrollo de proyectos de infraestructura económica mediante la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción, y comercialización eléctrica y ferrovía, incluyendo la provisión de equipamientos necesarios.

Dicho marco jurídico, permite:

- a) relación de larga duración entre el sector público y privado;
- b) sector privado participa en el financiamiento;
- c) sector privado participa en la operación de la infraestructura;
- d) Hay una distribución de riesgos entre el sector público y sector privado.

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), es la entidad especializada del Estado, que se encarga de la promoción, contratación y supervisión de los contratos APP, cuyo órgano máximo es el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, integrado por el sector público y privado.

Actualmente, se cuenta con un portafolio significativo de proyectos. No obstante, a pesar de la modernización institucional y normativa que ha hecho Guatemala en cuanto a la modalidad APP, no se ha realizado ningún proyecto bajo dicha modalidad.

Es por ello, que se considera que la ANADIE debe tener un rol más significativo en la promoción de este tipo de proyecto con las entidades del Estado, así como es necesario capacidades institucionales y técnicas de las instituciones.

Asimismo, también se ha identificado la necesidad de hacer unas reformas legales a la Ley. En primer lugar, se debe permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura social bajo el esquema de APP, tales como proyectos de educación, salud y agua, que actualmente se excluyen. En segundo término, se debe modificar la aprobación del Congreso de la República de los contratos de los proyectos, ya que actualmente, la aprobación es posterior al proceso de licitación, y ha ocasionado retrasos burocráticos que no permiten empezar con la ejecución de los proyectos.

En suma, se considera fundamental el desarrollo de las APP en Guatemala, que permitirá aumentar la productividad y competitividad del país, y así impulsar el crecimiento económico y generación de empleos mediante la inversión en infraestructura, para satisfacer las necesidades de la población.

VIII. FACILITACIÓN DEL COMERCIO

a. LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Hasta la fecha, en Guatemala ha existido una alta complejidad en los trámites administrativos, derivado principalmente por: por plazos excesivos, falta de implementación de tecnología y gobierno electrónico, involucramiento de distintos actores en los procesos, costos de gestión altos y requisitos innecesarios. Lo cual impacta negativamente en la economía del país, lo cual se demuestra en el *Índice Doing Business* en la cual Guatemala tiene el puesto número 96 de 190 países, según reporte 2020. Dicho estudio lo realiza el Banco Mundial con el objeto de evaluar y comparar la facilidad o dificultad de hacer negocios en un país, analizando el impacto que tiene la legislación e institucionalidad en la creación, operación y expansión de las empresas en un país.

Es por ello, que la Ley de Simplificación de requisitos y trámites administrativos, aprobada el 5 de mayo de 2021 mediante el Decreto 5-2021, se considera que contribuirá a la competitividad del país, pues busca optimizar, simplificar y reducir la tramitología en las instituciones públicas, lo que permitirá mejorar la eficiencia y productividad del Organismo Ejecutivo. La cual sería ideal que se aplicará a todas las instituciones públicas que realicen trámites administrativos.

La ley contiene 5 elementos que se consideran relevantes para lograr la simplificación de los trámites:

- **Institucionalidad**

Se establece un ente encargado para impulsar la simplificación de trámites administrativos, siendo éste la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico con apoyo del Ministerio de Economía, para la adecuada implementación de la ley, para la cual se le asignan funciones específicas de coordinación, promoción, supervisión, evaluación periódica, capacitación entre las distintas entidades del sector público e instituciones para la simplificación de trámites.

La ley es aplicable a todos los trámites administrativos que se gestionen en las dependencias del Organismo Ejecutivo. Para el efecto, todas las dependencias deberán ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas a las disposiciones de la ley, lo cual, se hará a través de un plan de planificación institucional de trámites y servicios administrativos.

Para el fortalecimiento de la gobernanza, se establece un régimen sancionatorio en la cual se establecen infracciones y sanciones a la normativa para los empleados, servidores o funcionarios públicos responsables de cometer las infracciones descritas.

Finalmente, es importante destacar que se establece la forma de denuncia y quejas por parte de los usuarios derivadas de la realización de

trámites administrativos ante la autoridad competente o designada a cargo de dicho trámite.

- **Atención al usuario**

La iniciativa contempla una gama de derechos al usuario en la gestión de trámites administrativos, además de normas relacionadas con la atención al público. Al respecto, es positivo que consideren facilitar el acceso a los trámites en forma física o electrónica, estableciendo oficinas de atención al público o el interior del país. Además, de considerar la implementación de mecanismos para que los usuarios evalúen la atención recibida.

- **Calidad regulatoria y de procedimientos**

Se considera importante la regulación sobre la calidad que deben tener las disposiciones y normativas que generen trámites administrativos en la búsqueda de eliminar todos aquellos procedimientos innecesarios, realizarlos de forma sencilla, utilizar al máximo elementos electrónicos, así como incorporar controles automatizados.

Otro elemento importante que toma en cuenta la iniciativa en referencia a la calidad, podemos mencionar: la calificación única de fondo y forma, evitando revisión parciales, la no exigencia de declaraciones juradas, la prohibición de exigir documentos e información propia de la dependencia, la no existencia de denuncia por pérdida de documentos, entre otros.

- **Digitalizar los trámites administrativos y uso de gobierno electrónico**

La iniciativa contiene normas que permiten la implementación mecanismos para el uso de tecnología y medios electrónicos para mayor agilidad en los trámites. Dentro de los cuales podemos mencionar:

- Las firmas de las personas en solicitudes o formularios que se presentan pueden ser de manera física o electrónica para realizar los trámites administrativos, y dicha firma se presumen auténticas y no requieren la legalización de firma ante notario.
- Las modalidades de pago se amplían a poder realizarlo por medio de pago electrónico, mediante banca virtual o aplicaciones de los bancos que la entidad trabaje, o directamente en cualquier sucursal de los bancos que la entidad trabaje u otros servicios de pago electrónico.
- Las entidades deben implementar las tecnologías necesarias para utilización e implementación progresiva de medios electrónicos, que permitan la realización de trámites a distancia o la mejora de sus archivos, con las condiciones de seguridad procedentes. Para ello, se establece: (i) obligaciones de informar sobre trámites administrativos en internet con la información de los trámites, requisitos, costos, procedimientos, tiempo y normativa aplicable; (ii) implementación de tecnología necesaria para realizar trámites a distancia procurando la automatización de los mismos; (iii) colocar en internet a disposición de los usuarios el formulario o solicitud para la gestión de trámite administrativo y disposición de poder realizar los trámites en línea; (iv) Cualquier documento electrónico o digitalizado, firmado con firma electrónica avanzada y enviado a las entidades a través de las herramientas que tengan disponibles para realizar trámites en línea, estará exento del envío de copias físicas y las entidades lo conservarán en forma digital (v) Expediente y archivo electrónico que contendrá toda la documentación vinculada al trámite administrativo; (vi) acceso a la información que conste en registro público; v) validez de documentos e información transmitida electrónicamente
- Dentro del marco de la simplificación, las entidades trabajarán de manera coordinada y crearán Portales Interinstitucionales dirigidos a trámites o sectores específicos. En ellos se realizarán

la totalidad las actuaciones administrativas para facilitar los servicios al usuario.

En ese sentido, con la aprobación de la Iniciativa logrará una reducción de procedimientos, costos, requisitos y tiempos en los trámites lo que incide directamente en la competitividad del país, mejorando en los índices internacionales, y como consecuencia, traerá mayor atracción extranjera directa.

b. REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS

El Decreto No. 19-2016 de la Ley emergente para la conservación del empleo se publicó en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2016. El propósito de la ley es promover, alentar y desarrollar actividades dentro del territorio aduanero nacional que puedan operar bajo los regímenes aduaneros creados a través de la ley.

Este Decreto responde al compromiso asumido por el Gobierno de Guatemala con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2010, que establece la eliminación de los subsidios prohibidos a las exportaciones.

El Decreto 19-2016 modificó la Ley de Promoción y Desarrollo de Exportaciones y Maquila, el Decreto 29-89, así como la Ley de Zonas Francas, el Decreto 65-89. Con la entrada en vigor de este nuevo marco legal, solo las empresas dedicadas a la confección de textiles para la confección y los centros de contacto o de llamadas pueden calificar como Productores bajo el Régimen de Entrada Temporal o Proveedor de Servicios.

En este sentido, el Decreto No. 19-2016 representó cambios significativos para las compañías que entonces operaban bajo las leyes de beneficios tributarios antes mencionados, y estableció nuevos requisitos y condiciones que deben cumplir las compañías que desean utilizar dichos beneficios.

Desde su entrada en vigencia, el establecimiento de nuevas empresas se ha visto disminuido ya que son muy pocas las empresas que puedan cumplir con los nuevos requisitos Decreto 29-89, Ley de Promoción y Desarrollo de Exportaciones y Maquila.

El 12 de mayo de 2021 se aprobó, mediante el Decreto 6-2021, una reforma al Decreto 65-89 que contiene la Ley de Zonas Francas, permitiendo el restablecimiento de 14 actividades para su operación bajo el régimen aduanero especial. Las reformas a la Ley de Zonas Francas contienen cambios que fortalecerán la seguridad jurídica y que mitigarán la fuga de capitales y la desaceleración económica provocada por la entrada en vigencia del Decreto 19-2016. La aprobación de este Decreto será un medio para generar un clima atractivo a la inversión.

c. APROBACIÓN DE UNA LEY DE COMPETENCIA

Antecedentes

La competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento sustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa.

La Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Estado debe desincentivar aquellas prácticas que afecten la economía nacional. En este sentido, la Ley de Competencia es el vehículo por el cual el Estado puede regular y desincentivar aquellas actividades de los agentes económicos –incluido el Estado– que dificulten contar con una economía abierta y libre.

Iniciativas de Ley

El Congreso de la República tiene la obligación de discutir y aprobar la Ley de Competencia. Actualmente no ha sido aprobada ninguna legislación relacionada por el alto grado de complejidad técnica y política que esta regulación conlleva. Ante la potencial aprobación de la iniciativa de Ley de

Competencia en Guatemala por parte del Congreso de la República, debe tomarse en consideración que dicha iniciativa debe tener un marco regulatorio que permita certeza jurídica y el fortalecimiento del desarrollo económico del país.

Alcance y enfoque

La regulación en materia de competencia debe contener elementos con relación al alcance de la ley y otros que se relacionen con la institucionalidad del país. La regulación que se apruebe debe considerar los aspectos que se detallan a continuación:

- La Ley de Competencia de Guatemala debería alinearse con el espíritu de la legislación estadounidense y no europea. De esta manera, la ley debería tender por priorizar la acción privada en la que sean los particulares que consideren estar sufriendo un daño por las prácticas anticompetitivas de un tercero los que inicien la acción, y no una entidad gubernamental centralizada a la que se le asigne un poder de vigilancia e intervención económica.
- La aplicación de la ley debe ser de carácter general y no incluir excepciones sectoriales pues esto no solo vulnera el principio constitucional de igualdad, sino además confiere un poder discrecional e ilimitado a la Superintendencia como entidad autónoma encargada de decidir arbitrariamente al respecto de dichas excepciones.
- La iniciativa debe respetar un debido proceso de carácter civil y no penal, dado que una práctica anticompetitiva no es más que un conflicto mercantil entre personas jurídicas o individuales por lo que la sanción no debe ser penal sino de naturaleza civil.
- La iniciativa debe abordar las prácticas anticompetitivas y no establecer cuotas de mercado a manera de concentraciones económicas a ser reguladas de manera tal que sea una ley que no vulnere el derecho constitucional de libertad de comercio e industria.
- Se debe respetar el debido proceso, la carga de la prueba debe recaer sobre la entidad o el sujeto que sostenga la existencia de una práctica anticompetitiva, y no a la inversa. En esta línea, la eficiencia mercantil no ha de ser considerada una práctica anticompetitiva.

- Las sanciones deben ser proporcional al daño causado y demostrado en contra de otros competidores, o en último caso, de los consumidores. Por esta razón debe existir un procedimiento y una serie de causales específicas que faculden a las entidades correspondientes a iniciar una acción en contra del sujeto mercantil.
- La normativa de competencia no debe sobre regular a fin de no afectar a los agentes económicos locales en relación con los agentes económicos internacionales.
- La entidad o autoridad encargada de la competencia debe ser técnica e independiente, es decir que no responda a intereses políticos. Es fundamental fortalecer la institucionalidad en aras de que dicha entidad no se politice y se evite la existencia de incentivos perversos.
- Los poderes de la entidad reguladora y su alcance deben quedar explícitamente definidos de manera tal que sus acciones estén siempre basados en ley. De esta manera, la facultad sancionatoria debe no solo estar claramente definida, sino, además, dicha facultad jamás debe ser confiscatoria y debe poderse ejercer solo si existe un daño previamente demostrado por la misma.
- Debe protegerse la confidencialidad de la información. La entidad de competencia deberá resguardar con estricta confidencialidad la información a la que tendrá acceso.

Conclusiones

Se debe de tomar en cuenta el contexto guatemalteco y la estructura del país para que la normativa pueda aplicarse progresivamente en la medida que los mercados evolucionan. Los puntos discutidos anteriormente se consideran necesarios para que se tomen en cuenta al momento de regular la Ley de Competencia en Guatemala. Se debe velar por la eficiencia económica, fortalecer la institucionalidad y observar el respeto del derecho constitucional de libertad, comercio e industria.

IX. REACTIVACIÓN ECONÓMICA

a. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

El Doing Business es un mecanismo para evaluar y comparar la facilidad o dificultad de hacer negocios en un país. Dicha evaluación se realiza a través del impacto que tiene la legislación e institucionalidad en la creación, operación y expansión de empresas en un país. El índice analiza diez indicadores: tiempo para abrir un negocio, obtención de electricidad, obtención de crédito, comercio transfronterizo, pago de impuestos, manejo de permisos de construcción, registro de propiedad, cumplimiento de contratos, protección a inversionistas minoritarios y resolución de insolvencias.

Según el reporte 2020, Guatemala subió 2 posiciones en relación al año anterior, ubicándose en el puesto 96 de 190 países.

Por otro lado, el Índice de Competitividad Global es una herramienta elaborada por el Foro Económico Mundial con la intención de ser utilizada para identificar y comparar la capacidad para proveer oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos de los países analizados.

Para la edición 2018-2019 del ICG, Guatemala obtuvo una puntuación de 53.51 ubicándose en la posición 98 de 141 países evaluados. En las tres categorías que califica el índice Guatemala obtuvo las siguientes puntuaciones:

- Entorno propicio (instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica y adopción de TICs): 52.7, rank 106
- Mercados (mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero y tamaño de mercado): 54.66, rank 84
- Capital humano: (salud, capacitación y educación): 62.67, rank 99
- Ecosistemas de innovación (Dinamismo de los negocios y capacidad de innovación): 43.68, rank 97

El país obtuvo las puntuaciones más altas en el pilar de eficiencia financiera (74.81) relacionado con la solidez de los bancos, la estabilidad del mercado financiero y los bajos costos de los servicios financieros, lo cual incentiva la actividad comercial.

Aunque podrían mencionarse más indicadores, lo anterior es tan solo una manifestación de la inminente necesidad que existe de realizar las reformas necesarias para fomentar la competitividad y el desarrollo económico del país.

b. LEY DE INSOLVENCIAS

Antecedentes

El COVID-19 ha impactado no solo la salud de las personas sino también su economía. El mercado naturalmente se ajusta de forma más rápida que el marco legal. Esta pandemia anticipa una desaceleración económica importante que afectará en mayor manera a los pequeños y medianos empresarios. Los primeros síntomas de esta situación comienzan a verse con un incremento en la tasa de desempleo y se puede asumir que muchas de esas empresas tendrán en un futuro una situación de insolvencia. Legalmente el Código Procesal Civil y Mercantil regula las ejecuciones colectivas a través del concurso voluntario y el concurso necesario;¹ es dentro de estas figuras legales que se trata la insolvencia de un deudor. A pesar de que la normativa actualmente vigente fue promulgada en 1963,² son pocos los procesos de ejecución colectiva que han sido tramitados y que actualmente se tramitan en los Tribunales de Justicia Civiles y Mercantiles de la República de Guatemala.

La normativa actualmente vigente, el Código Procesal Civil y Mercantil, data de 1963. Básicamente en 53 artículos (347 a 400) el ordenamiento

¹ *Vid.*, Los artículos 347 a 400 del Código Procesal Civil y Mercantil regulan la ejecución colectiva. Estas normas regulan

² El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 fue promulgado el 14 de septiembre de 1963 por el entonces Jefe de Gobierno Enrique Peralta Azurdia.

jurídico guatemalteco desarrolla la insolvencia de las personas naturales y jurídicas. A diferencia de otros países esta normativa, para su época, es muy visionaria puesto que incluye tanto la posibilidad de insolvencia de una persona natural como de una persona jurídica.³ La normativa actual también tiene un orden de prelación de los acreedores y busca establecer con precisión como debe de tratarse cada tipo de acreeduría,⁴ brindando una estructura lógica y de orden de pagos. Quizás, en donde presenta una mayor limitación esta normativa es en la rapidez y practicidad del proceso, pues aún y cuando exista un acuerdo entre acreedores y deudor

este siempre se ha interpretado que este debe de ser aprobado por un juez.⁵ En la práctica los procesos judiciales de insolvencia o quiebra rara vez han concluido en un tiempo adecuado, ya sea por la mora judicial, la cantidad de procesos que tienen asignados los tribunales o por la falta de conocimiento técnico de parte de los operadores de justicia para tramitar el proceso. En otras palabras, la norma sustantivamente tiene un fundamento y sustento, pero desde un punto de vista práctico, el proceso de insolvencia no ha podido concluirse de forma ágil y rápida. La normativa legal es un obstáculo para la solución del conflicto legal.

Iniciativa 5446

³ El artículo 347 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: *“Las personas naturales o jurídicas, sean o no comerciantes, que hayan suspendido o están próximas a suspender el pago corriente de sus obligaciones, podrán proponer a sus acreedores la celebración de un convenio. Podrán hacerlo también, aún cuando hubieren sido declaradas en quiebra, siempre que ésta no haya sido calificada judicialmente de fraudulenta o culpable.”*

⁴ El artículo 392 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: *“La clasificación y graduación de créditos, salvo lo dispuesto en otras leyes, seguirá el siguiente orden: 1. Acreedurías por alimentos presentes y por trabajo personal.*

2. Acreedurías por gastos de última enfermedad y funeral, testamento, inventario y proceso sucesorio. 3. Acreedurías establecidas en escritura pública, según el orden de sus fechas. 4. Acreedurías comunes, que comprende todas las no incluidas en los numerales anteriores. En cuanto a los créditos hipotecarios y prendarios, una vez pagados, si hubiere sobrante, éste se entregará al depositario de la quiebra. Aceptada la graduación de créditos por la Junta general o firmes los autos que resuelvan las impugnaciones que se hubieren hecho, el síndico formulara la liquidación del concurso, estableciendo la cantidad que a cada acreedor corresponda en el saldo que resulte, después de deducidos los gastos legales. Las costas de la quiebra serán pagadas de toda preferencia.”

⁵ El artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: *“Si el convenio no hubiere sido aceptado y aprobado judicialmente, el deudor será declarado insolvente y procederá el concurso necesario o la quiebra, según los casos.”*

En el caso de la iniciativa 5446 del Congreso de la República “Ley de Insolvencias”, actualmente en discusión y con dictamen favorable, regula nuevamente ciertos principios que ya se encuentran reconocidos a nivel constitucional, en la Ley del Organismo Judicial y el propio Código Procesal Civil y Mercantil. Esta normativa se basa en dos pilares, primero propone un plan de reorganización aprobado por mayoría de los acreedores, sin embargo, para hacerlo contempla la creación de un boletín judicial de quiebras en donde se publicará el convenio. A su vez, propone la creación de juzgados especializados en quiebras y de una Dirección Nacional de Insolvencias a cargo del Ministerio de Economía, cuyo propósito es apoyar en el trámite de las insolvencias promoviendo la conciliación de una forma técnica. Este modelo, aún y cuando brinda soluciones a muchas interrogantes actuales como el pago de impuestos o la consideración de un crédito como incobrable, tiene exactamente el mismo problema que el Código Procesal Civil y Mercantil: el procedimiento lejos de ser una solución rápida y práctica se convierte en un obstáculo para resolver el problema. Esto lógicamente solo hará, tal y como sucede ahora, que quienes se encuentren en un estado de insolvencia simplemente no hagan nada. En una situación como la desaceleración económica provocada por la pandemia COVID-19, una normativa como ésta debe buscar una solución real y ejecutable en el corto plazo por las siguientes razones:

- (1) Propone la creación de juzgados especializados, es decir son Juzgados que actualmente no existen y que el Organismo Judicial deberá crear y poner en marcha. Si tomamos como parámetro la respuesta que actualmente ha tenido el Organismo Judicial frente al COVID-19, la realidad es que estos juzgados no verán la luz hasta uno o dos años después de la entrada en vigor de la norma.
- (2) La modificación del proceso escrito al proceso oral. Si bien es cierto la oralidad facilita la agilidad con la que pueda tramitarse un proceso, el Organismo Judicial en materia civil no está listo para un cambio radical en el corto plazo. Además, que una simple remisión al Juicio Oral del Código Procesal Civil y Mercantil es el

equivalente a desconocer la práctica en Tribunales en cuanto a que estos procesos, salvo contadas excepciones, igual se tramitan de forma escrita.

- (3) Crea una entidad adicional, dependiente del Ministerio de Economía para brindar asesoría técnica en este tipo de procesos, tanto a los deudores como a los acreedores. Esperar a que se cree una entidad y peor aún, que entre en operaciones, es el equivalente a no brindarle una solución el corto plazo a la ciudadanía.

Conclusiones

La discusión y aprobación de una iniciativa de ley de insolvencias es positiva. Es necesario que se hagan reformas y modificaciones a los procedimientos de insolvencias en Guatemala. Sin embargo, debe prestarse atención al contenido de dicha iniciativa y que la misma si tenga un impacto positivo, que no se caiga en el mismo problema que existe hoy en día.

Una propuesta adecuada debe buscar generar un cambio sencillo que pueda permitirles a personas, que si tienen el conocimiento adecuado en materia de insolvencias y quiebra tramitar los procesos legales. La propuesta debería incluir reformas al Código Procesal Civil y Mercantil que permita al deudor y a los acreedores tramitar el proceso de insolvencia y quiebra ante un Notario. Actualmente existe la experiencia con varios procesos legal en los que un notario hace las veces de un Juez. Dentro de estos procesos es de especial importancia destacar los procesos sucesorios, toda vez que estos tienen características muy similares a las insolvencias y son un ejemplo de agilidad frente al aparato judicial. Mientras un proceso sucesorio en sede notarial puede tomar entre 6 meses y 1 año, en sede judicial el plazo mínimo es de 2 años. Una propuesta como ésta, que implicaría reformar el Código Procesal Civil y Mercantil estableciendo la posibilidad de tramitar en su totalidad el proceso de insolvencia ante Notario, tiene un beneficio real y plausible. Hay más notarios que jueces en el mercado legal y esto permite que la adecuación

en el mercado legal sea mucho más rápida y eficiente que crear una serie de juzgados especializados y una nueva Dirección del Ministerio de Economía.

c. COMPLIANCE

X. ASUNTOS MIGRATORIOS

a. ACUERDO ENTRE GUATEMALA Y LOS EEUU SOBRE UN PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES - ACUERDO PTAT-

El Acuerdo PTAT busca fortalecer el programa de visas H-2A de los Estados Unidos conforme al cual los empleadores de dicho país contratan trabajadores agrícolas temporales extranjeros, facilitando el otorgamiento de las visas en mención con un enfoque en los territorios con el mayor riesgo de migración irregular.

El énfasis del acuerdo radica en la implementación de medidas de protección para los trabajadores guatemaltecos, para que no sean explotados por reclutadores de mano de obra extranjera. De este modo, se busca prevenir que se genere un marco que de apariencia de legalidad a la operación de traficantes de personas alrededor de las visas H-2A. Las empresas que se dediquen a reclutar trabajadores guatemaltecos deben estar registradas tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Embajada de Estados Unidos. Estas empresas serán el vínculo entre las empresas estadounidenses que deseen contratar trabajadores guatemaltecos y los trabajadores.

Por otro lado, el acuerdo profundiza en cuanto a la cantidad de visas que estarán disponibles, por lo que en primera instancia se puede entender que queda abierta la cantidad, aunque lo más probable es que, como ha sucedido con el acuerdo general, ya se haya negociado alguna cifra en particular

El uso de las visas H-2A se ha incrementado a lo largo de la última década. En 2018 se concedieron 196,409 visas de este tipo, con un incremento de 21 por ciento sobre las emitidas en 2017. En el caso de Guatemala, en 2018 se emitieron 7,337 visas tipo H, aunque en el reporte del Departamento de Estado no se hace el desglose por subcategoría.⁶ Ello no limita el que, con este nuevo acuerdo, una parte considerable del crecimiento de visas H2-A que habrá el próximo año pudiese llenarse con guatemaltecos.

Según las estadísticas disponibles, el salario promedio para los trabajadores agrícolas en EE. UU. con visa H-2A en 2017 osciló entre USD 11.10 y USD 13.01 por hora, mientras que el salario promedio en Guatemala para actividades agrícolas por hora es de USD 1.43.

⁶ V. <https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html>



AMCHAM
GUATEMALA

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

AmCham In Action

AmCham participates actively to be a source of opinions and proactive solutions to the problems that affect the social and economic development of the country, with a significant advocacy in the bilateral agenda between the United States of America and Guatemala.

INDEX

- I. RULE OF LAW
 - a. INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND RULE OF LAW
 - b. GOVERNMENT PROCUREMENT LAW
 - Institutional strengthening
 - Professionalization
 - Public Budget and Planning
 - Anti-corruption and Accountability System
 - Conflict resolution
 - Regulatory Concentration
 - Minimal Exceptions
 - Specific regulation for to contracting goods and services
 - Information Accessibility and Contracting System
 - c. CONSULTATION WITH INDIGENOUS PEOPLE – ILO CONVENTION 169
 - d. ILO CONVENTION 175 REGULATION
 - II. INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS
 - a. GENERAL LAW OF ROAD INFRASTRUCTURE
 - b. STRENGTHENING PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN GUATEMALA
 - III. TRADE FACILITATION
 - a. LAW FOR THE SIMPLIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 - b. REACTIVATION OF FREE TRADE ZONES
 - c. APPROVAL OF A COMPETITION LAW
 - IV. ECONOMIC RECOVERY
 - a. ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
 - b. INSOLVENCY LAW
 - V. MIGRATORY ISSUES
 - a. AGREEMENT BETWEEN GUATEMALA AND THE US CONCERNING A TEMPORARY AGRICULTURAL WORKERS PROGRAM -TAWP AGREEMENT
-

REF. CONTENT FOR AMCHAM IN ACTION

VI. RULE OF LAW

a. INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND RULE OF LAW

The Guatemalan-American Chamber of Commerce -AmCham- firmly believes that upholding and respecting the Rule of Law of the country through the fight against impunity and corruption is essential.

It is important to continually strengthen the institutions, democracy and the independence of the Jurisdictional Bodies that play an important role in the transformation of the country.

Discretionary court rulings and weakness in the judicial institutions have created an environment of uncertainty that is resulting in private sector distrust for the judicial system. The weakness of the Rule of Law is materialized through concrete situations that affect businesses such as judicial and administrative proceedings in which the principles of presumption of innocence are not respected; judicial institutions that fail to comply with the terms of the law; and arbitrary interpretations of the law.

In the other hand, lack of response from the institutions to questions and requirements that the companies make in the framework of administrative or judicial processes.

It is important for Guatemalan society to live in a climate of political and social harmony and stability, respecting the private property and contributing to the economic growth of Guatemala by prioritizing legal certainty, transparency and common good. These are all essential principles to ensure economic development and growth to promote new investment and the creation of jobs, to avoid the internal and external displacement of the population, by improving their quality of life.

AmCham believes that the main focus for Guatemala's public and private sectors and civil society should be institutional building aimed at maintaining the stability and harmony of the country. We firmly believe in the fight against corruption through strong institutions and their presence throughout the country, while providing legal certainty to investors and entrepreneurs.

b. GOVERNMENT PROCUREMENT LAW

For the sake of the country's competitiveness and attraction of foreign direct investment, it is necessary to have an efficient and transparent public procurement system. Currently, public sector contracting is governed by the State Procurement Law, decree 52-87 and its regulations. However, to this end, said regulation has been modified on several occasions, causing contradictions and inconsistencies within the same text. Which does not respond to current needs.

For this, it is necessary to develop a new regulatory framework that guarantees an adequate balance between checks and balances and the necessary freedom to contract efficiently and competitively, without neglecting the need to strengthen transparency.

Therefore, following the recommendations of the Public Governance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, and the Agreement on Government Procurement of the World Trade Organization, it is considered necessary that any proposed regulatory framework on this issue must include the following pillars:

- **Institutional strengthening**

The Public Procurement System must be endowed with a solid institutional infrastructure that promotes efficiency and mitigates arbitrary decision making. Therefore, it is necessary for any new regulation to strengthen the Ministry of Finance, as the coordinating entity of the central government's contracting and procurement system and its

decentralized and autonomous entities, in which the necessary resources and clearly established institutional coverage are available. for proper administration. Likewise, there are guidelines and guidelines for all entities in charge of contracting, they must comply with to avoid the proliferation of dispersed regulations subject to the different criteria of each government entity.

- **Professionalization**

The efficiency of the System goes hand in hand with the professionalization of public officials. Thus, the tools should be designed so that all officials in charge of public procurement have a high level of integrity and technical training. For him

- **Public Budget and Planning**

For the contracting processes to be more efficient and to optimize public spending, public procurement must be integrated into the management of public finances, in this way, the regulation must reflect coordination between procurement and budget management, establishing the obligations and the procedure for budgeting and multi-year financing to optimize the design and planning of the procurement cycle.

- **Anti-corruption and Accountability System**

The Public Procurement System must have internal controls, measures to guarantee compliance with contracts and anti-corruption programs, aimed at contracting entities and suppliers. For this, it is necessary that public contracts include guarantees of exemption from corruption and adopt measures to verify the veracity of declarations and guarantees of exemption from corruption.

- **Conflict resolution**

The efficiency of the contracting system will also depend on the functioning of the conflict resolution mechanisms established by law. The law must contemplate efficient conflict resolution mechanisms in the administrative part.

- **Regulatory Concentration**

The Public Procurement System must be endowed with a wide margin of certainty to foster the confidence of applicants and avoid arbitrariness by the entities in charge of contracting. Therefore, the law must contain reasonable and solid provisions so that the bidding and contracting terms are as clear and simple as possible, avoiding the introduction of conditions that reduce or contradict those of other laws or regulations.

The publication and regulations and agreements of the Bidding Boards should be regulated in such a way that all the relevant information for the application of the law is found and derived from a single regulatory body. This becomes easier to inspect for each government entity because there is no need to adapt to the regulations of each independent entity.

- **Minimal Exceptions**

The abuse of exceptions has resulted in an unpredictable, ungovernable, difficult to control and inefficient system, with high risks of corruption. Therefore, the exceptions should be limited, as well as contracting with a single supplier. Similarly, the hiring process should be regulated in cases of emergency and public calamity.

The exceptions must be minimal, in addition, the process must be established so that there are always requirements to comply with an efficient and transparent mechanism.

- **Specific regulation for to contracting goods and services**

A specific regulation must be created for the contracting of goods and services, in accordance with their characteristics and specific characteristics.

- Information Accessibility and Contracting System

It is essential that the regulatory framework encourages the transparent and effective participation of all stakeholders, seeking to increase efficiency throughout the public procurement cycle. The implementation of information and communication technologies is an important aspect to achieve this objective, because it represents a means to guarantee transparency and access to public tenders, promote competitiveness, simplify the procedures for awarding contracts and their management.

c. CONSULTATION WITH INDIGENOUS PEOPLE – ILO CONVENTION 169

The Government of Guatemala ratified ILO's Convention 169 in June 1996, whereby it assumed the responsibility of implementing non-binding consultation processes prior to authorizing administrative measures that may affect the rights of indigenous peoples concerning their culture, forms of life, institutions, traditions, collective rights and the right to participate effectively in decisions that impact their forms of development. At the moment there is no document that provides the Executive branch with an appropriate procedure to hold consultation processes which respect the criteria of prior, informed consultation made in good faith.

The Court system has ordered consultation for mining, hydroelectric and electric transmission projects in different stages: preparation, construction and operation. The operation of two hydroelectric projects were cancelled for 105 days and two mining projects were temporarily suspended.

In most rulings, the Constitutional Court has instructed the Ministry of Energy and Mines to implement consultation processes using ILO's Convention 169 as a sufficient guideline. The Ministry of Energy and Mines developed a methodology to implement these procedures to fulfill its

instructions, and took advantage of the experiences of other countries such as Peru, Colombia and Chile. This methodology was shared with the representatives of communities in each case.

The Ministry of Labor and Social Welfare is the agency in charge of handling International Labor Organization matters and through it, the Government of Guatemala took the initiative to work on an Operations Guide for the implementation of Consultations with Indigenous Peoples.

This Operations Guide was created with the help of AmCham as a tool to guide the Executive branch in the implementation of consultation processes through a framework to guide the relationship with Indigenous Peoples. It provides a detailed process with specific activities to be met and assess as part of the process, it includes a participatory process that is respectful of Indigenous Peoples' customs, and allows the joint construction of a mechanism of permanent dialogue to accomplish agreements, monitoring and compliance.

To fulfill the ruling issued by the Constitutional Court in the case of the Oxec I and Oxec II hydroelectric projects, the President of Guatemala, acting in his capacity as the representative of the Executive Branch, presented to the Speaker of Congress the Operations Guide for the Implementation of Consultation Processes with Indigenous Peoples within the framework of ILO's Convention 169, as a guide for the drafting of the law by Congress to meet the consultation process obligation.

Through the Ministry of Labor and Social Welfare, the Government of Guatemala engaged in important efforts with representatives of various sectors, particularly Indigenous Peoples' leaders, to build consensus for the immediate practical enforcement of this Operations Guide. Support was received from the ILO, UNDP, the Legislative Branch, Embassies and Indigenous Leaders. Despite efforts by the Executive Branch to create a mechanism for the implementation of Consultation Processes under ILO's Convention 169, clarity about Indigenous Leaders' representation, and

understanding of the spirit and scope of the Convention by Indigenous Peoples is necessary.

Nevertheless, the process of consultation with Indigenous Peoples within the framework of ILO's Convention 169 still needs a robust and articulated institutional framework, with presence in rural areas and the capacity to cover basic needs in Indigenous Peoples territories. It is therefore necessary to take into account the conditions that must be in place to implement these processes and that the operations guide is just a tool to give certainty, but this guide should be followed by the creation of the complete framework.

The cancellation or suspension of mining and hydroelectric projects needs to be stopped. These rulings sabotage the objectives of the Alliance for Prosperity Plan for the Northern Triangle with the United States, which seeks to reduce the high costs of electric power, enhance the low levels of investment, create employment and much more.

For example, by suspending operations of Minera San Rafael – Tahoe, more than 17,000 direct jobs have been put at risk, which are the livelihood of more than 85,000 Guatemalans. Furthermore, revenues of over 5 million dollars per day stop flowing into the country in the form of payments to suppliers, taxes and royalties, plus more than 120 million dollars in annual investment and payments to suppliers. The operations of the mining were suspended for more than 300 days, meanwhile in other cases of this matter the companies were able to continue their operations while the consultation is done.

After more than 1 year of suspension the Constitutional Court issued a ruling on the constitutional action for relief of the suspension, ordering the Ministry of Energy and Mining to proceed with the consultation and the mining to renew operations after the consultation. This is a clear example of the lack of rule of law that the country is experiencing and we truly

believe that if this kind of issues stays unsolved the competitiveness of Guatemala will be negatively affected.

There is a need for a clear regulation and processes for the consultation, considering that the convention 169 does not have a complete procedure on how to fulfill the requirements of an efficient consultation, and this as a result will bring more unsolved cases and lack of rule of law for the investors.

d. ILO CONVENTION 175 REGULATION

The ILO Convention No. 175 was approved in June 1994, and ratified by Guatemala in January 2017. By express provision of the text of the Convention, each signatory party undertook the obligation of regularizing its through internal national legislation.

On June 3, 2019, the Executive Branch approved the Regulation of Convention No. 175 by means of the Agreement 89-2019 of the Ministry of Labor and Social Security. On October 3, 2019, the Constitutional Court provisionally suspended some articles of the regulation, which rendered it inoperative.

On July 15, 2021, the Constitutional Court ruled inadmissible the unconstitutionality actions raised regarding the Convention Regulation, giving rise to part-time hiring in Guatemala. The Court considered part-time hiring as a way to open up new employment opportunities and the need to ensure the protection of part-time workers in the fields of access to employment, working conditions, and social security, as determined by the aforementioned Convention.

VII. INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS

a. GENERAL LAW OF ROAD INFRASTRUCTURE

Regulations on road infrastructure are currently outdated. For which it is positive to have a single legal framework for greater legal certainty, such as the one that would be created through the General Law of Road

Infrastructure. It is positive that the initiative establishes the obligation to have a long-term National Infrastructure Plan, since this would not only allow for a more effective inspection and monitoring of the development of infrastructure projects at the national level in relation to its execution and the detection of factors that could put this factor at risk, but would also reduce the margin of discretion for making decisions of a political nature, given the binding power of said plan.

The initiative of the General Law of Road Infrastructure, by having its own contracting process and allowing the submission of unsolicited offers, would incorporate a dynamic system that has been effective in other countries as it would boost the road infrastructure development procedure , resulting in an increase in coverage, quality and competitiveness. Additionally, these aspects would promote better coordination between the Highway Authority and developers, by eliminating unnecessary regulation that only bureaucratizes the infrastructure development process.

It is positive that the initiative establishes a deadline to expedite the granting of licenses of an environmental, forestry or other nature. If the term elapses, said licenses will be considered granted, which is why the incentives are aligned for the corresponding entities to carry out the respective procedures in the corresponding term. However, establishing “of another nature” can lead to misinterpretations, it is important to clearly determine which permits it refers to.

The diversification of the remuneration mechanisms in attention to the contracting modalities, among which are included the payment for construction, for maintenance, for availability, for contributions made by the road authority or third parties for the development of the project, payment for tolls, and any other determined by the Road Authority is positive since it promotes efficiency in the development of infrastructure projects. It also allows multi-year contracting, which will allow long-term projects.

In addition, the creation of the Superintendency of Infrastructure is important in terms of autonomy and decentralization of functions, however, in this situation, a regulatory modification should be considered to reduce the functions that by law correspond to the Ministry of Communications, Infrastructure and Housing. as this would continue to be the governing body of road infrastructure.

b. STRENGTHENING PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN GUATEMALA

Currently, Guatemala faces major challenges in the country's infrastructure, which has impacted the quality of life of the inhabitants, as well as the productivity and competitiveness of the country, due to the various limitations of the traditional model in the development of infrastructure and provision of services, such as: fiscal and investment limitations, lack of planning and project execution capacity.

Other countries have overcome the problem by using the public private partnerships (PPP) contracting scheme, in which there is cooperation between the government and the private sector, allowing the efficient and high quality development of infrastructure, achieving the development of large-scale projects, such as the expansion of the road network, ports, airports, among others.

Guatemala, through the Government Procurement Law, decree No. 57-92, contemplated the possibility of public-private participation in a broad sense, through the figure of public concession to individuals, which allows the State to grant individuals, for that at their own risk, build, improve and / or administer a work, good or public service, under the control of the granting public entity, in exchange for a renumbering that the individual charges users of the work, good or service .

However, said legal framework needed an update and modernization for the development of PPP projects, which is why, in 2010, a new legal and

institutional framework for contracting is created through PPP modality, with the approval of Partnerships for the Development of Economic Infrastructure, approved in decree 16-2010 and its regulation approved by government agreement 360-2011, which allows the development of economic infrastructure projects through the creation, construction, development, use, exploitation, maintenance, modernization and expansion of infrastructure, highways, roads, ports, airports, generation projects, driving, and commercialization of electricity and railways, including the provision of necessary equipment.

This legal framework allows: a) long-term relationship between the public and private sectors; b) private sector participates in financing; c) private sector participates in the operation of the infrastructure; d) There is a distribution of risks between the public and private sectors.

The National Agency of Alliances for the Development of Economic Infrastructure (ANADIE), is the specialized entity of the State, which is responsible for the promotion, contracting and supervision of PPP contracts, whose maximum body is the National Council of Alliances for the Development of Economic Infrastructure, integrated by the public and private sector.

Currently, there is a significant portfolio of projects. However, despite the institutional and regulatory modernization that Guatemala has done regarding the PPP modality, no project has been carried out under that modality.

That is why, it is considered that ANADIE should have a more significant role in promoting this type of project with state entities, as well as institutional and technical capacities of the institutions is necessary.

Likewise, the need to make legal reforms to the Law has also been identified. First, the development of social infrastructure projects must be allowed under the PPP scheme, such as education, health and water

projects, which are currently being excluded. In the second term, the approval of the Congress of the Republic of the project contracts must be modified, since currently, the approval is subsequent to the bidding process, and has caused bureaucratic delays that do not allow starting with the execution of the projects.

In sum, the development of PPPs in Guatemala is considered essential, which will increase the country's productivity and competitiveness, and thus boost economic growth and job creation through infrastructure investment, to meet the needs of the population.

VIII. TRADE FACILITATION

a. LAW FOR THE SIMPLIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Currently, in Guatemala, there is a high complexity in the administrative procedures, derived mainly by: excessive deadlines, lack of implementation of technology and electronic government, involvement of different actors in the processes, high management costs and unnecessary requirements. This has a negative impact on the country's economy, which is demonstrated in the Doing Business Index in which Guatemala has the number 96 out of 190 countries, according to the 2020 report. Said study is carried out by the World Bank in order to evaluate and compare the ease or difficulty of doing business in a country, analyzing the impact that legislation and institutions have on the creation, operation and expansion of companies in a country.

That is why the Initiative Law for the Simplification of Administrative Procedures and Requirements, approved on May 5, 2021 by means of the Decree 5-2021, is considered to contribute to the competitiveness of the country, as it seeks to optimize, simplify and reduce the paperwork in public institutions, which improves efficiency and productivity. of the Executive Branch. Which would be ideal to apply to all public institutions that carry out administrative procedures.

The Law contains 5 elements that are considered relevant to achieve the simplification of procedures:

- Institutional

An entity in charge of promoting the simplification of administrative procedures is established, this being the Presidential Commission of Open and Electronic Government with support from the Ministry of Economy, for the adequate implementation of the law, for which specific functions of coordination, promotion are assigned. , supervision, periodic evaluation, training between the different entities of the public sector and institutions for the simplification of procedures.

The law is applicable to all the administrative procedures that are managed in the dependencies of the Executive Organism. To this end, all agencies must adjust their administrative procedures, plans and internal policies to the provisions of the law, which will be done through an institutional planning plan for administrative procedures and services.

To strengthen governance, a sanctioning regime is established in which infractions and sanctions to the regulations are carried out for employees, servants or public officials responsible for committing the infractions described.

Finally, it is important to highlight that the form of complaint and complaints by users derived from the completion of administrative procedures before the competent or designated authority in charge of said procedure is established.

User Support

The initiative contemplates a range of user rights in the management of administrative procedures, as well as regulations related to customer service. In this regard, it is positive that they consider facilitating access to procedures in physical or electronic form, establishing customer service offices or the interior of the country. In addition, to consider the implementation of mechanisms for users to evaluate the care received.

- Regulatory and procedural quality

It is considered important to regulate the quality that the provisions and regulations that generate administrative procedures must have in the quest to eliminate all unnecessary procedures, perform them in a simple way, use electronic elements to the maximum, as well as incorporate automated controls.

Another important element that the initiative takes into account in reference to quality, we can mention: the sole qualification of substance and form, avoiding partial review, the non-requirement of sworn statements, the prohibition of requiring documents and information of the agency, the non-existence of complaint for loss of documents, among others.

- Digitize administrative procedures and use of electronic government

The initiative contains norms that allow the implementation of mechanisms for the use of technology and electronic means for greater agility in the procedures. Among which we can mention:

- The signatures of the people in applications or forms that are presented can be physically or electronically to carry out administrative procedures, and said signature is presumed authentic and does not require the legalization of the signature before a notary public.
- The payment methods are extended to be able to do it by means of electronic payment, through virtual banking or applications of the banks that the entity works, or directly in any branch of the banks that the entity works or other electronic payment services.
- The entities must implement the technologies necessary for the use and progressive implementation of electronic media, which allow

remote procedures to be carried out or the improvement of their files, with the appropriate security conditions. For this, it establishes: (i) obligations to report on administrative procedures on the Internet with information on procedures, requirements, costs, procedures, time and applicable regulations; (ii) implementation of the technology necessary to carry out procedures remotely, seeking to automate them; (iii) place on the internet available to users the form or application for the management of administrative procedures and disposition to be able to carry out the procedures online; (iv) Any electronic or digitized document, signed with an advanced electronic signature and sent to the entities through the tools they have available to carry out online procedures, will be exempt from sending physical copies and the entities will keep it in digital form (v) Electronic file and file that will contain all the documentation related to the administrative procedure; (vi) access to information in the public registry; v) validity of documents and information transmitted electronically

- Within the framework of simplification, the entities will work in a coordinated manner and will create Interinstitutional Portals aimed at specific procedures or sectors. In them, all the administrative actions will be carried out to facilitate the services to the user.

In this sense, with the approval of the Initiative, it will achieve a reduction in procedures, costs, requirements and times in the procedures, which directly affects the competitiveness of the country, improving the international indexes, and as a consequence, it will bring greater direct foreign attraction.

b. REACTIVATION OF FREE TRADE ZONES

Decree No. 19-2016 of the Emerging Law for the Conservation of Employment was published in the Official Gazette on March 30, 2016. The purpose of the law was to promote, encourage and develop activities within the national customs territory able to operate under the customs regimes created through the law.

This Decree responded to the commitment made by the Government of Guatemala to the World Trade Organization (WTO) in 2010, which establishes the elimination of prohibited subsidies to exports.

Decree 19-2016 amended the Law on the Promotion and Development of Exports and Maquila, Decree 29-89, as well as the Free Zone Act, Decree 65-89. With the entry into force of this new legal framework, only companies engaged in the making of apparel-textiles and contact or call centers can qualify as Producers under the Temporary Entry or Service Provider Regime.

In this sense, Decree No. 19-2016 represented significant changes for the companies that were then operating under the aforementioned tax benefit laws, and established new requirements and conditions to be met by companies wanting to use such benefits.

Since becoming effective, more than 60 companies have sought to meet the qualification to obtain the benefits of Decree 29-89, Law on the Promotion and Development of Exports and Maquila, of which 42% are new companies, and the rest are businesses aiming at being admitted again.

As of December 31, 2016, 1,394 companies classified under Decree 29-89, 477 (34%) carry out their productive activity in the apparel and textiles sector. They created 39,684 jobs in that year (25% of the total employment created by this sector). The remaining 66% are 917 companies that created 118,549 jobs in the same period of time.

On May 12, 2021, an amendment to Decree 65-89, which contains the Free Zone Act, was approved by means of the Decree 6-2021, allowing the reestablishment of 14 activities for their operation under the special customs regime. The reforms to the Free Zone Act contain changes that will strengthen legal security and mitigate capital flight and the economic slowdown caused by the entry into force of Decree 19-2016. The approval

of this Decree will be a means to generate an attractive investment climate.

c. APPROVAL OF A COMPETITION LAW

Background

Competition, as the guiding principle of any market economy, represents a substantial element in the economic organization model of our society and constitutes, at the level of individual freedoms, the first and most important way in which the exercise of freedom manifests itself.

The Political Constitution of the Republic of Guatemala stipulates that the State must discourage those practices that affect the nation. In this sense, the Antitrust Law is the vehicle by which the State can regulate and discourage those activities of economic agents –including the State– that make it difficult to have an open and free economy.

Legislation

Congress of the Republic must discuss and approve the Antitrust Law. Currently, no related legislation has been approved due to the high degree of technical and political complexity that this regulation entails. Given the potential approval of the initiative for the Antitrust Law in Guatemala by the Congress of the Republic, it must be taken into consideration that said initiative must have a regulatory framework that allows legal certainty and the strengthening of the country's economic development.

Scope and focus

The antitrust regulation must contain elements related to the scope of the law and others that are related to the country's institutional framework. The regulation that is approved must consider the aspects detailed below:

- The Guatemalan Antitrust Law should be aligned with the spirit of US Antitrust Law and not European law. In this way, the law should tend to prioritize private action in which it is the individuals who consider being suffering damage due to the anti-competitive practices of a third party

who initiated the action, and not a centralized government entity to which it is assigned power of surveillance and economic intervention.

- The application of the law must be general and not include sectoral exceptions as this not only violates the constitutional principle of equality but also confers a discretionary and unlimited power to the Superintendency as an autonomous entity in charge of arbitrarily deciding regarding said exceptions.
- The initiative must respect due process of a civil and non-criminal nature since an anti-competitive practice is nothing more than a commercial conflict between legal persons or individuals, so the sanction must not be criminal but of a civil nature.
- The initiative must address anticompetitive practices and not establish market shares in the form of economic concentrations to be regulated in such a way that it is a law that does not violate the constitutional right to freedom of trade and industry.
- Due process must be respected, the burden of proof must fall on the entity or subject that sustains the existence of the anti-competitive practice, and not vice versa. Along these lines, commercial efficiency should not be considered an anti-competitive practice.
- Sanctions must be proportional to the damage caused and demonstrated against other competitors, or ultimately, consumers. For this reason, there must be a procedure and a series of specific grounds that empower the corresponding entities to initiate an action against the commercial subject.
- Antitrust regulations should not over-regulated in order not to affect local economic agents concerning international economic agents.
- The entity or authority in charge of antitrust must be technical and independent, that is, it must not respond to political interests. It is essential to strengthening the institutional framework, so that said entity is not politicized, and the existence of perverse incentives is avoided.
- The powers of the regulatory entity and its scope must be explicitly defined in such a way that its actions are always based on law. In this way, the sanctioning power must not only be clearly defined but also,

said power must never be confiscatory and must be able to be exercised only if there is damage previously demonstrated by it.

- The confidentiality of the information must be protected. The antitrust entity must keep the information to which it will have access strictly confidential.

Conclusions

The Guatemalan context and the country's structure must be taken into account so that the regulations can be applied progressively as markets evolve. The points discussed above are considered necessary to be taken into account when regulating the Antitrust Law in Guatemala. Economic efficiency must be ensured, the institutions should be strengthened, and respect for the constitutional right to freedom, commerce and industry must be observed.

IX. ECONOMIC RECOVERY

a. ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

The Doing Business a mechanism to evaluate and compare the ease or difficulty of doing business in a country. This evaluation is carried out through the impact that legislation and institutions have on the creation, operation and expansion of companies in a country. The index analyzes ten indicators: time to open a business, obtaining electricity, obtaining credit, cross-border trade, paying taxes, managing construction permits, registering property, enforcing contracts, protecting minority investors and resolving insolvencies.

According to the 2020 report, Guatemala rose 2 positions in relation to the previous year, ranking 96 out of 190 countries.

On the other hand, the Global Competitiveness Index is a tool developed by the World Economic Forum with the intention of being used to identify and compare the capacity to provide economic development opportunities to the citizens of the countries analyzed.

For the 2018-2019 edition of the Global Competitiveness Index, Guatemala obtained a score of 53.51, ranking 98 out of 141 countries evaluated. In the three categories that the index qualifies, Guatemala obtained the following scores:

- Enabling environment: 52.7, rank 106.
- Markets: 54.66, rank 84.
- Human capital: 62.67, rank 99.
- Innovation ecosystems (Business dynamism and innovation capacity): 43.68, rank 97.

The country obtained the highest scores in the financial efficiency pillar (74.81) related to the soundness of the banks, the stability of the financial market and the low costs of financial services, which encourages commercial activity.

Although more indicators could be mentioned, the foregoing is just one manifestation of the imminent need to carry out the necessary reforms to promote competitiveness and economic development in the country for the attraction of foreign direct investment.

b. INSOLVENCY LAW

Background

COVID-19 has impacted not only people's health but also their economy. The market naturally adjusts faster than the legal framework. This pandemic anticipates a significant economic slowdown that will affect mostly small and medium-sized entrepreneurs. The first symptoms of this situation begin to be seen with an increase in the unemployment rate and it can be assumed that many of these companies will have an insolvency situation in the future. Legally, the Civil and Commercial Procedural Code regulates collective executions through voluntary and necessary competition;^[1] It is within these legal figures that the insolvency of a debtor is dealt with. Despite the fact that the current

regulations were enacted in 1963,[2] There are few collective execution processes that have been processed and are currently being processed in the Civil and Commercial Courts of Justice of the Republic of Guatemala.

The regulations currently in force, the Civil and Commercial Procedural Code, dates from 1963. Basically in 53 articles (from 347 to 400) the Guatemalan legal system develops the insolvency of natural and legal persons. Unlike other countries, this regulation, for its time, is very visionary since it includes both the possibility of insolvency of a natural person and a legal person.[3] The current regulations also have an order of priority for creditors and seek to establish precisely how each type of creditor should be treated,[4] providing a logical order and payment structure. Perhaps, where this regulation presents a greater limitation is in the speed and practicality of the process, because even when there is an agreement between creditors and debtor, it has always been interpreted that this must be approved by a judge.[5] In practice, judicial insolvency or bankruptcy proceedings have rarely been concluded in an adequate time, either due to judicial delay, the number of processes assigned by the courts or due to the lack of technical knowledge on the part of the operators. of justice to process the process. In other words, the rule has a substantive foundation and support, but from a practical point of view, the insolvency process has not been able to be concluded in a fast and agile way. Legal regulations are an obstacle to the solution of the legal conflict.

Initiative No. 5446

In the case of the initiative No. 5446 of the Congress of the Republic, named "Insolvency Law", it is currently under discussion. It regulates certain principles that are already recognized at constitutional level, in the Judicial Organism Law and in the Civil and Commercial Procedural Code. This regulation is based on two pillars. First, it proposes a reorganization plan approved by the majority of creditors. However, to do so, it contemplates the creation of a bankruptcy judicial bulletin where the agreement will be published. At the same time, it proposes the creation of

specialized bankruptcy courts and a National Insolvency Directorate in charge of the Ministry of Economy, whose purpose is to support insolvency proceedings by promoting conciliation in a technical way. This model, even though it provides solutions to many current questions such as the payment of taxes or the consideration of a loan as uncollectible, has exactly the same problem as the Civil and Commercial Procedural Code: the procedure, far from being a quick and practical solution, is it becomes an obstacle to solving the problem. This logically will only, as it happens now, that those who are in a state of insolvency simply do nothing. In a situation such as the economic slowdown caused by the COVID-19 pandemic, regulations such as this must seek a real and executable solution in the short term for the following reasons:

- (1) It proposes the creation of specialized courts, that is, they are Courts that do not currently exist and that the Judicial Body must create and implement. If we take as a parameter the response that the Judicial Body has currently had to COVID-19, the reality is that these courts will not see the light until one or two years after the entry into force of the rule.
- (2) The modification of the written process to the oral process. Although it is true that orality facilitates the agility with which a process can be processed, the Judicial Branch in civil matters is not ready for a radical change in the short term. In addition, that a simple reference to the Oral Trial of the Civil and Commercial Procedural Code is the equivalent of disregarding the practice in Courts in that these processes, with few exceptions, are still processed in writing.
- (3) It creates an additional entity, dependent on the Ministry of Economy to provide technical advice in this type of process, both to debtors and creditors. Waiting for an entity to be created and worse, for it to come into operation is the equivalent of not providing a short-term solution to the citizenry.

Conclusions

The discussion and approval of an insolvency law is positive. Reforms and modifications to the insolvency procedures in Guatemala are necessary. However, attention must be paid to the content of this initiative and that it does have a positive impact, that it does not fall into the same problem that exists today.

An adequate proposal should seek to generate a simple change that can allow people, who do have the proper knowledge of insolvencies and bankruptcy, to process legal processes. The proposal should include reforms to the Civil and Commercial Code to allow the debtor and creditors handle the process of insolvency and bankruptcy before a notary. Currently there is experience with various legal processes in which a notary acts as a judge. Among these processes, it is especially important to highlight the succession processes, since they have very similar characteristics to insolvencies and are an example of agility in the face of the judicial apparatus. While a succession process in a notary office can take between 6 months and 1 year, in court the minimum term is 2 years. A proposal like this, which would involve reforming the Civil and Commercial Procedural Code establishing the possibility of processing the insolvency process in full before a Notary, has a real and plausible benefit. There are more notaries than judges in the legal market and this allows adaptation in the legal market to be much faster and more efficient than creating a series of specialized courts and a new Directorate of the Ministry of Economy.

[1] *Vid.*, Articles 347 to 400 of the Civil and Commercial Procedural Code regulate collective execution. These standards regulate

[2] The Civil and Mercantile Procedural Code, Decree 107 was promulgated on September 14, 1963 by the then Head of Government Enrique Peralta Azurdia .

[3] Article 347 of the Code of Civil and Commercial Procedure establishes: *“Natural or legal persons, whether or not they are merchants, who have suspended or are about to suspend the current payment of their obligations, may propose to their creditors the celebration of a agreement. They may also do so, even when they have been declared bankrupt, provided that it has not been judicially classified as fraudulent or guilty. ”*

[4] Article 392 of the Code of Civil and Commercial Procedure establishes : *“The classification and graduation of credits, except as provided in other laws, will follow the following order: 1. Acreedurías for food present and for personal work.*

2. Creditors for last illness and funeral expenses, will, inventory and succession process. 3. Accreditations established in public deed, according to the order of their dates. 4. Common credentials , which includes all those not included in the previous numerals. As for the mortgage and pledge credits, once paid, if there is a surplus, it will be delivered to the depositary of the bankruptcy. Accepted the graduation of credits by the General Meeting or the cars that resolve the challenges that have been made, the trustee will formulate the liquidation of the bankruptcy, establishing the amount that corresponds to each creditor in the resulting balance, after deducting the legal expenses . The bankruptcy costs will be paid of all preference. ”

[5] Article 367 of the Civil and Commercial Procedural Code establishes: *“If the agreement has not been judicially accepted and approved, the debtor will be declared insolvent and the necessary bankruptcy or bankruptcy will proceed, as the case may be. ”*

c. COMPLIANCE

X. MIGRATORY ISSUES

**a. AGREEMENT BETWEEN GUATEMALA AND THE US
CONCERNING A TEMPORARY AGRICULTURAL WORKERS
PROGRAM -TAWP AGREEMENT –**

The TAWP Agreement seeks to strengthen the U.S. H-2A visa program under which U.S. employers hire foreign temporary agricultural workers, facilitating the granting of visas with focus on the territories with the highest risk of irregular migration.

The emphasis of the Agreement lies in the implementation of protective measures for Guatemalan workers, so that they are not exploited by foreign labor recruiters. In this way, it is sought to prevent the creation of a framework that allows the operation of human trafficking structures using the H-2A visa program. Within the terms of the Agreement, companies dedicated to recruiting Guatemalan workers must be registered with both the Guatemalan Ministry of Labor and the United States Embassy in Guatemala. These companies will be the only legal link between U.S. companies that wish to hire Guatemalan workers.

The use of H-2A visas has increased over the last decade. In 2018, 196,409 visas of this type were granted, with an increase of 21 percent over those issued in 2017. In the case of Guatemala, in 2018, 7337 type H visas were issued, although the State Department's report does not make a breakdown by subcategory. With this new Agreement, a considerable part of the growth of H2-A visas that will take place next year could be filled with Guatemalans.

According to available statistics, the average salary for agricultural workers in the US. with an H-2A visa in 2017, ranged between USD 11.10 and USD 13.01 per hour, while the average salary in Guatemala for agricultural activities per hour is of USD 1.43.



AMCHAM
GUATEMALA

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE



AmCham Guatemala

